

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO:	761473331702 <b>20130024201</b>
DEMANDANTE:	NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL <a href="mailto:Notificaciones.armenia@mindefensa.gov.co">Notificaciones.armenia@mindefensa.gov.co</a> <a href="mailto:Notificaciones.cartago@mindefensa.gov.co">Notificaciones.cartago@mindefensa.gov.co</a>
DEMANDADO:	JHON FREDDY ARRUBLA CARVAJAL – REPRESENTADO A TRAVÉS DE CURADOR AD LÍTEM

**MAGISTRADO PONENTE: GUILLERMO POVEDA PERDOMO**

Sentencia de segunda instancia No. **028**

**ACCION DE REPETICION**

(Resuelve apelación sentencia)

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 2 Oral Administrativo de Descongestión del Circuito de Cartago, el 29 de mayo de 2015, una vez surtido el trámite procesal correspondiente.

**I. Antecedentes**

**1.1. La demanda y su contestación**

**1.1.1. Pretensiones**

En ejercicio del medio de control de repetición (art. 142 del CPACA), la parte actora la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, por conducto de apoderado judicial, demanda al señor Jhon Fredy Arrubia Carvajal quien fungía como soldado del Ejército Nacional, para:

1. Que se le declare responsable por los perjuicios causados a la entidad, como consecuencia de la condena impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la sentencia del 27 de abril de 2009 proferida por el Juzgado Único Administrativo de Cartago, por lesiones que sufrió el señor Jorge Vidal Benavides Soto.
2. Solicita que se condene al demandado a cancelar la suma de (\$271.362.689.05) M/cte., que debió pagar la entidad al afectado al ejecutar la condena impuesta por el juzgado, a través de la Resolución No. 1090 del 8 de marzo de 2011.
3. Reconocer los intereses comerciales generados a favor de la entidad, desde la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.
4. Que se ajuste la condena impuesta con base en el I.P.C.

### **1.1.2. Fundamentos fácticos**

El Juzgado Único Administrativo del Circuito de Cartago con sentencia del 27 de abril de 2009, modificada por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con fallo del 28 de mayo de 2010, declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por las lesiones que sufrió el soldado Jorge Vidal Benavides, causadas con un arma de dotación oficial, por el soldado demandado Arrubla Carvajal y ordenó la indemnización de todos los perjuicios.

En cumplimiento de tal decisión judicial, la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, expidió Resolución No. 1090 del 8 de marzo de 2011, por medio de la cual ordenó el pago de la indemnización a favor del señor Jorge Vidal Benavides y sus familiares.

### **1.1.3. Fundamentos de derecho**

Adujo la parte actora que, la actuación desplegada por el demandado fue grave, pues de las pruebas que allegan al proceso, con su arma de dotación oficial con la que ocasionó el daño, fue manipulado con absoluta imprudencia y sin tomar medidas mínimas de seguridad.

Además, menciona la parte actora que la actuación del funcionario público, fue constitutiva de culpa grave en tanto desconoció flagrantemente la disposición de mantener el arma descargada, más aún cuando el demandado ha recibido entrenamiento para el manejo y funcionamiento de armas en la institución.

### **1.1.4. Contestación a la demanda**

Contestó el curador *Ad-litem* del señor Jhon Fredy Arrubla,<sup>1</sup> que se acoge a las decisiones que, a lo largo del ejercicio procesal, el juez encuentre debidamente demostradas, condena solicitada ajustada a derecho, por la declaratoria de condena patrimonial.

## **1.2. Decisión de primera instancia**

El Juzgado 2º Oral Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cartago, mediante sentencia de 29 de mayo de 2015, negó las

---

<sup>1</sup> Folios 57 del cuaderno principal, designación y posesión como curador *ad-litem*.

pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas procesales a la entidad demandante.

Considero la juez A-quo que, no obstante estar acreditadas: i) la condena judicial a cargo de la entidad pública y ii) el pago efectivo realizado por parte del Ejército Nacional, faltó demostrar presupuestos de esta responsabilidad patrimonial de servidor público.

Consideró que no se demostró en debida forma la calidad de servidor público, las funciones que desempeñaba el señor Arrubla Carvajal, puesto que, si bien la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Militar de la Brigada, condenó al señor Arrubla Carvajal, al concluir que su actuar fue doloso, no es suficiente, no puede servir como argumento para la prosperidad del medio de control ya que el análisis de culpabilidad en materia penal difiere del análisis que sobre culpa grave debe de hacerse en materia de repetición, la cual a su juicio no está configurada.

### **1.3. Recurso de apelación**

La apoderada de la demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia y en el escrito argumentó que, la entidad se encuentra inconforme con la decisión, porque la actuación desplegada por el señor Arrubla Carvajal, fue gravemente culposa, pues el arma con la que causó el daño fue manipulada con imprudencia y desconoció flagrantemente una prohibición legal de mantener el arma descargada en tanto que se le adelantó una investigación penal.

Aseveró que, la responsabilidad de los funcionarios, depende de su falla personal y la posibilidad de repetición contra su patrimonio por parte de la entidad pública, que resulte condenada de acuerdo a lo estipulado por la ley 446 de 1998, por lo que solicita, que la sentencia sea revocada y declare administrativamente responsable al demandado a reintegrar a la institución el dinero por ella pagado al cumplir la condena.

### **1.4. Trámite de segunda instancia**

Una vez admitido el recurso de apelación presentado por la apoderada de la entidad demandante y, al considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, se dispuso correr traslado, a las partes para alegar conclusión y al Ministerio Público para su concepto.

#### 1.4.1. Alegatos de la parte actora

El apoderado de la entidad demandante no alegó.

#### 1.4.2. Concepto del Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público emitió concepto, en el cual analizó si la entidad demandante cumplió con los elementos para determinar la prosperidad de las pretensiones de repetición, así:

- ✓ **La calidad del agente del estado y su conducta determinante en la condena**, no fue acreditada en la demanda, tampoco se allegó hoja de vida del soldado que hubiere permitido establecer su vinculación con el Ministerio de Defensa Nacional, su fecha de ingreso, fecha de retiro, a que contingente pertenecía, quién era su superior. lo que impide establecer si el demandado como autor del hecho en cuestión, como empleado o funcionario público, está llamado a responder por los perjuicios referidos en la demanda por lo que no puede prosperar la acción de repetición.
- ✓ **El pago efectivo realizado por el estado**, solo se acreditó la copia auténtica de la certificación del 18 de marzo de 2013 suscrita por la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional, cumpliendo la resolución No. 1090 y se cancela el valor de \$271.362.689.05, a favor de la señora NUBIA CASTILLO, mediante transferencia electrónica a la cuenta del Banco Caja Social, no obra con la demanda recibo suscrito por los demandantes de ese proceso, manifestando que les fue cancelado el valor total de la condena proferida, motivo por el cual tampoco puede prosperar el medio de control.
- ✓ **La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el estado como dolosa o gravemente culposa**, no se logró probar en el demandado la calidad de agente del Estado, ni tampoco su conducta.

Por las razones expuestas, solicita que se confirme la sentencia de primera instancia.

## II. CONSIDERACIONES

No se encuentra en discusión la competencia ni el trámite surtido en este asunto, tampoco se observa irregularidad para enmendar, por lo que se definirá el problema o litigio objeto del proceso.

## **2.1. Problema jurídico**

El problema jurídico a resolver en esta instancia consiste en determinar si se demostraron la culpa grave o dolo del señor Jhon Fredy Arrubla Carvajal y su condición de servidor público, como responsable por las lesiones causadas a otro soldado y, según sea la respuesta se decide sobre las pretensiones de la demanda.

## **2.2. De lo acreditado en el proceso**

De las pruebas obrantes en el proceso se destacan las siguientes:

2.2.1.- Copia del Fallo proferido el 19 de diciembre de 2007 por el juzgado Militar Tercero de la Brigada a través de la cual condenó al señor Jhon Fredy Arrubla Carvajal a la pena principal de 3 años como autor único y responsable de la comisión de delito de lesiones personales en la modalidad dolosa contra el señor Jorge Benavides Soto (fls. 93 a 100 cuaderno 2).

2.2.2.- Copia de la decisión del 27 de agosto de 2013, a través de la cual el Juzgado Tercero de Brigada Primera Instancia, declaró la prescripción de la pena dentro del proceso adelantado al señor Fredy Arrubla Carvajal y ordenó el archivo de la actuación (fls. 108 a 109 cuaderno 2).

2.2.3.- Copia auténtica de la sentencia No. 021 del 27 de abril de 2009, emitida por el Juzgado Único del Circuito Judicial de Cartago (fls. 31 a 48 cuaderno 2).

2.2.4.- Copia auténtica de la sentencia del 28 de mayo de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual modificó la sentencia de primera instancia, reduciendo la condena respecto de los perjuicios materiales e inmateriales en la modalidad de fisiológicos - daño de la vida en relación, providencia que quedó ejecutoriada el día 01 de junio de 2010 (fls. 50 a 68 cuaderno 2).

2.2.5.- Resolución No. 1090 del 8 de marzo de 2011 suscrita por el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la cual se dio cumplimiento a la sentencia proferida dentro del proceso 76001-23-31-000-2005-04133-01, en la que se advierte que se ordenó el pago de \$271.362.689.05 (fls 18 a 21 cuaderno 2).

2.2.6.- Copia auténtica del certificado, del día 22 de marzo de 2011, expedido por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa Nacional en el que consta que el valor \$271.362.689.05 fue cancelado a la señora NUBIA CASTILLO RODRIGUEZ, en varias transacciones.

### **2.3. Análisis Normativo sobre el medio de control de repetición.**

El artículo 90 de la Constitución Política dispuso que

<<el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas>>,

y

<<en el evento de ser condenado el estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.>>

La ley 1437 de 2011 en su artículo 142, ordena a las entidades públicas promover la misma vía judicial <<como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto>><sup>2</sup>.

En la responsabilidad del Estado el daño no es sólo el resultado de una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que se cause un daño a una persona que no debe soportarlo.<sup>3</sup>

El legislador expidió la Ley 678 de 2001, para definir la repetición como una acción civil de carácter patrimonial, que debe de ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también de los particulares que ejercer función pública. La misma regulo algunos aspectos procesales, para la prosperidad del medio de control que está sujeta a que se acrediten algunos requisitos, siguiendo el criterio jurisprudencial en la materia por el Consejo de Estado:

✓ Calidad del demandado como agente o ex agente del Estado.

---

<sup>2</sup> Sentencia 00262 de 2018.

<sup>3</sup> Sentencia C-430/00.

La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado, la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado.<sup>4</sup>

- ✓ La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

- ✓ El pago efectivo que se haya realizado.

La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de una prueba que, en caso de ser documental, generalmente suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce la obligación y ordena el pago para su extinción, en favor del beneficiario y/o su apoderado, con la prueba de ese pago que es por el recibido por parte del acreedor de la obligación cancelada o pagada o acreditar que se hizo consignación a la cuenta que el acreedor dispuso para su pago y/o mediante un paz y salvo, siempre deben estar suscritos por el beneficiario o acreedor de la obligación que se dice fue cancelada.<sup>5</sup>

- ✓ La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa.

Frente a esta calificación tiene la entidad la carga de la prueba, en debida forma, para definir la responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público, si desconocer el sentido de la sentencia C-374 de 2002, que es para los casos de presunción de dolo o culpa, no para cuando estén demostrados de manera diferente a la presunta:

---

<sup>4</sup> Sentencia 00445 de 2016 Consejo de Estado.

<sup>5</sup> Sentencia 2003-00007-01 del 8 de noviembre de 2007, ponente Ramiro Saavedra Becerra

<<Conviene recordar que la existencia de presunciones legales no comprometen el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa, pues si bien es cierto que por regla general los sujetos procesales están obligados a demostrar los hechos que alegan como fundamento de su pretensión - *onus probandi incumbi actori*-, también lo es que con el fin de promover la equidad en las relaciones procesales que surgen a raíz de la acción de repetición, así como de propender por la protección y efectividad de bienes jurídicos relevantes como la moralidad y la defensa del patrimonio público, el legislador bien podía relevar al Estado de la carga de la prueba cuando al ejercer dicha acción alega en su favor presunción de dolo o culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en contrario.>>

Conforme lo expresado, las presunciones se emplean para liberar de la carga de la prueba, exclusivamente para suplir otros medios de prueba, significando con ello que no sirve para desconocer los demás, como el valor probatorio de los documentos públicos que según el Código General del Proceso, igual al Código de Procedimiento Civil:

<<Art. 257 Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.

... .>>

Establece la ley que documentos públicos, como son las sentencias, de la Justicia Penal Militar y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, hacen fe de otorgamiento, fecha y lo declarado en ellas.

#### **2.4. Caso concreto**

Para la Sala se encuentran acreditados, con suficiencia, los requisitos necesarios para acceder a lo pretendido, tanto la condición de servidor público como el grado de culpa, presupuestos requeridos para generar la responsabilidad personal del funcionario aquí demandado.

Está demostrada en el plenario la condena impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la sentencia del 27 de abril de 2009, proferida por el Juzgado Único Administrativo de Cartago, modificada por ésta Corporación, con ponencia del doctor Álvaro Pío Guerrero Vinuesa, el 28 de mayo de 2010, por las lesiones que sufrió por arma de fuego de dotación oficial, el señor Jorge Vidal Benavides Soto, de parte de su compañero, también mencionado como soldado Jhon Fredy Arrubla Carvajal, que liquidada asciende a \$271.362.689.05 M/cte.

De ese documento público, además de los funcionarios judiciales que la expiden, se tiene certeza de su fecha y, por supuesto, de la responsabilidad del Estado por la conducta de un servidor público, un soldado y con el arma de dotación oficial, es decir, carece de fundamento legal, resulta contrario al mandato del valor probatorio del documento público, se desconoce ese alcance probatorio de las sentencias en referencia.

Respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Militar Tercero de Brigadas, de la Tercera División del Ejército, de 19 de diciembre de 2007, que condena por el delito de lesiones personales al demandado en su condición de soldado, también existe certeza de su otorgamiento oficial, su fecha, y del proceder con dolo, porque es *declaración de funcionario en documento público*, como evidencia su parte resolutive:

<<PRIMERO.- CONDENAR, como en efecto condena al Soldado del Ejército Nacional JHON FREDY ARRUBLA CARVAJAL, identificado con la C..C No. 94.464.118 DE Caicedonia, Valle, de anotaciones civiles y militares conocidas en el proceso, a la pena principal de TRES (3 AÑOS DE PRISIÓN, como autor único y responsable de la comisión del delito de LESIONES PERSONALES en la modalidad DOLOSA, en la humanidad del soldado BENAVIDES SOTO JORGE VIDAL, identificado con la C.C. No. 6.519.809 de Ulloa, Valle, agotado en las circunstancias de tiempo modo y lugar de que dan cuenta las diligencias y de acuerdo con los planteamientos vertidos en el cuerpo del proveído.>> (fl. 32 c. 2)

Adicionalmente, la competencia tanto del juez militar como de esta jurisdicción, dependía de la condición de servidor público o de militar causante del daño, de las lesiones personales.

Por ello aquellas providencias, en su análisis, hacen referencia a la condición de soldado campesino del aquí demandado, para el momento de los hechos, aspectos fundamento de sus decisiones, demostrados y que no puede desconocer esta Sala.

Por ley, el valor probatorio de los documentos públicos citados, son suficientes para demostrar los hechos que constituyen presupuesto en la repetición, a diferencia del criterio de la jueza a quo quien buscó alguna presunción de ley sobre dolo o culpa, extrañándolas, mientras la Sala encuentra probado tanto la condición de soldado del agresor aquí demandado como del tipo de conducta, calificada de dolosa, ambos presupuestos para acceder a condena en este medio de control y conforme con la impugnación.

## 2.5. Condena en costas

Finalmente, conforme con el artículo 188 del CPACA, que ordena pronunciarse en la sentencia sobre costas, así lo hará esta Sala y, por el artículo 365 del CGP, la condena en costas procede, si se acreditan en el proceso, lo que no sucedió aquí puesto que no hubo intervención por la contraparte en este recurso de apelación, es decir, no se causaron, motivo por el cual no corresponde condenar a ellas.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### FALLA:

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia proferida el 29 de mayo de 2015 por el Juzgado 2 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cartago, conforme las consideraciones expuestas.

**SEGUNDO: CONDENAR** en favor de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al señor JHON FREDY ARRUBLA CARVAJAL a cancelar la cantidad de \$271.362.689.05 M/cte., así como los intereses en los términos de ley.

**TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS** de esta instancia.

**CUARTO:** Ejecutoriada la presente providencia **DEVOLVER** el expediente al juzgado de origen dejando las constancias de rigor.

Esta decisión fue discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales y suscrita electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co> en donde se puede corroborar su autenticidad.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
GUILLERMO POVEDA PERDOMO  
Magistrado

  
ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES  
Magistrada

  
ZORANNY CASTILLO OTALORA  
Magistrada